



SEIS MESES MIRADOS HACIA ADELANTE

Javier Ponce

Quito, julio de 2007

Los análisis de coyuntura del CEP cuentan con el auspicio de Desarrollo y Paz de Canadá, EED-Servicio de las Iglesias Evangélicas en Alemania para el Desarrollo, Pan para el Mundo de Alemania e Hivos de Holanda.

SEIS MESES MIRADOS HACIA DELANTE

Los primeros seis meses del gobierno de Rafael Correa han estado dedicados a marcar escenarios futuros. De allí que una tradicional retrospectiva de lo que se hizo versus lo que se ofreció tiene poco sentido.

En ese campo bastaría con afirmar que algunas de las ofertas de campaña se han cumplido, particularmente tres: la duplicación del bono solidario, la reactivación e incremento del bono de la vivienda y la viabilidad de la Asamblea Constituyente. Otros ofrecimientos que han ido surgiendo en el camino y que van desde el puente que une las poblaciones de San Vicente y Bahía de Caráquez en Manabí hasta el aeropuerto en El Oro o la rehabilitación del ferrocarril (ofrecimiento que se ha convertido desde hace dos décadas en un ritual de todo gobierno), están planteados y es inoficioso detenerse en ellos o calificar a un régimen por algo que ha sido el viejo estilo de la política en el Ecuador.

Y en este último sentido, hay una primera observación que se podría formular: el régimen de Correa camina en los linderos de la vieja política y de la propuesta de algo distinto. En el mejor de los casos estaríamos en una cierta transición. El gobierno ha planteado debates trascendentes; al mismo tiempo que ha reincidido en prácticas tradicionales como por ejemplo negociaciones con mayorías móviles en el parlamento a partir de influir desde el poder sobre grupos dispersos o resentidos con sus tiendas políticas de origen; o las ofertas de obras o entrega de recursos a propósito de las visitas presidenciales fuera de la capital; o la presencia al interior del gobierno de personajes nacidos y crecidos en la vieja política, problema que es más evidente en la constitución de Alianza País en las diversas provincias, en algunas ocasiones con dirigentes que han deambulado, arrastrando sus clientelas políticas por más de un partido.

Rafael Correa ha buscado que caracterice su gestión la cobertura de todo el país con su presencia física. Se mantiene atento a ciertos conflictos o áreas de carencias en los que su presencia renueva la vigencia de esos conflictos. Visitas sorpresivas al hospital del Seguro Social en Quito o a la cárcel de Guayaquil, han sido decidoras del estilo presidencial. Al mismo tiempo la realización de los gabinetes itinerantes mantienen viva la imagen de un presidente que está cerca de la población, más aún cuando ha sido tradicional en nuestro país que los grupos sociales busquen dirimir sus desacuerdos con el Estado o con sectores privados, acudiendo al propio presidente y no a los funcionarios respectivos. Hasta las situaciones particulares –por ejemplo un asesinato no aclarado o una injusticia de carácter personal- reclaman la intervención presidencial. Aquello ha acabado significando que el presidente Correa intervenga en aspectos tan domésticos como el paso de los buses interprovinciales por el puente de la Unidad Nacional en Guayaquil; aunque este episodio puede tener otra lectura política sobre la que volveremos.

Con frecuencia la oposición al gobierno afirma que el presidente Correa confronta inútilmente y con distintos sectores “polarizando” a los ecuatorianos. Aparte de que hablar de polarización cuando un gobierno mantiene un apoyo de

alrededor del 70% de la población resulta un equívoco, las confrontaciones no han sido gratuitas.

Es posible identificar cuatro escenarios de confrontación: con los banqueros, con los medios de comunicación, con los grupos de poder social y político de Guayaquil y con poblaciones que han radicalizado sus movilizaciones tal vez amparadas en la creencia de que contarían con el apoyo gubernamental (caso pobladores de Orellana y sectores opuestos a las empresas mineras en el Austro).

En cuanto a los tres primeros tipos de confrontación, responden, nos parece, a la intención del gobierno de plantear otras formas de relación del Estado central con los poderes fácticos. Mientras en el caso de la confrontación con sectores de poder de Guayaquil y con los medios de comunicación, ésta ha tomado cuerpo a través de rencillas y polémicas puntuales, la confrontación con los banqueros ha sido frontal y ha colocado en la preocupación de la ciudadanía un manejo arbitrario del negocio financiero que venía siendo aceptado por la sociedad sin beneficio de inventario. Temas como las comisiones, los intereses o la ausencia de una direccionalidad de los créditos en función de las prioridades nacionales ya no pueden ser soslayadas, incluso si el gobierno no consigue aplicar su proyecto de “justicia financiera” maltratado en el congreso.

Esta confrontación evidenció, por otra parte, el carácter mafioso y manipulador del gremio de los banqueros, que se ocultaron en una millonaria campaña de televisión, atrás de un tipo de cliente que no es el más característico de los bancos, que ha sido recientemente abordado por la banca como uno de los filones más rentables y al que han convertido en sujeto de crédito las cooperativas y los pequeños sistemas financieros locales al margen de la banca: los microempresarios. En ese caso, el “libre mercado” financiero sirvió para que ciertos bancos manejaran líneas de crédito con intereses que superaban el 50%, paradójicamente argumentando como “dificultades” aquello que es precisamente el valor de la intervención de los sistemas financieros alternativos: la distancia del banco con respecto a un cliente disperso, lo que incrementa costos de operación; los supuestos servicios de capacitación y seguimiento al microempresario, que actúa en un contexto social solidario, contexto que es la mejor garantía de cumplimiento y que para el gran banco es desconocido.

La asociación de bancos no tuvo empacho en acudir peligrosamente a la estrategia del miedo para derrotar en la opinión pública las propuestas de reforma al sistema propuestas por Correa. Y en el marco de esa estrategia, agitó el fantasma de la crisis financiera de 1999, para recordarnos, a los cientos de miles de perjudicados, el drama vivido; e intentar de ese modo forzar la opinión pública. Allí, en esos casos, el negocio se impone a la ética informativa de los medios de comunicación.

A partir de la confrontación de Correa con la banca, la visión de la sociedad sobre el sistema financiero se ha modificado definitivamente. Resta esperar los cambios reales que puedan ocurrir.

Otro ámbito de polémica ha sido la relación con los medios de comunicación. Si bien se puede sostener, en un análisis ligero que a Correa “se le fue la mano” y no falte quien vea en esa confrontación el trasfondo autoritario del presidente, su actitud marcó una radical diferencia con una historia de complicidades entre los medios y el poder político, es decir, entre dos poderes. Interpretan ligeramente que es sólo un recurso demagógico de un presidente que sabe que la credibilidad y legitimidad de los medios está por debajo del 10% en las encuestas, es una lectura posible. Preferimos la otra que hace referencia a los viejos análisis de la comunicación alternativa con respecto a la libertad de expresión. Nos parece que los medios han rebasado los linderos entre la información y la opinión, han relajado su espíritu crítico hasta convertirlo en una secuencia de zancadillas hacia el otro con el que están en desacuerdo. Las críticas más agudas al papel de los grandes medios de comunicación han partido de la consideración de que la construcción de sentido en el campo social o cultural radica en los movimientos sociales y no en las pretensiones hegemónicas de los grandes medios de construir la opinión pública.

Martín Barbero señala con certeza que los medios aportan a la gente grupos de pertenencia, quién es el enemigo, sobre quién proyectar sus miedos y frustraciones y con quién soñar. Y todo ello, por pedazos, por fragmentos dispersos.

¿Es posible, es legítimo, nos preguntamos, que la sociedad aspire a otros medios de comunicación? Con plantearse esta pregunta, se habrá avanzado bastante a partir de la confrontación de Correa.

Sin embargo, no se pueden menospreciar ciertos riesgos que el gobierno corre en su confrontación y que no contribuyen al cuestionamiento fundamental. Por ejemplo, expresiones despreciativas hacia algunos periodistas o la última reforma al reglamento que prohíbe la difusión de un tipo de productos, las grabaciones clandestinas, que fueron iniciadas por el propio gobierno. Al final, lejos de modificar un comportamiento de los medios, que sería bueno que se replanteen el uso “porno” que están haciendo de dichas grabaciones, la decisión de Correa le pone al borde de una ruptura más profunda con los medios y le coloca en un callejón sin salida, si es que los canales de televisión en conjunto se rebelan contra la prohibición. ¿Qué hará en esos casos? ¿Los clausurará en conjunto? ¿Soslayará el hecho? ¿O acaso el gobierno confía en que los medios no arriesguen tanto, dada la propia fragilidad que viven frente a la ciudadanía?

Finalmente, la confrontación con los poderes fácticos de Guayaquil y con sus instituciones tradicionales, responde a una clara disputa de espacios políticos y de control de los procesos en la ciudad más grande del país. Es evidente que allí se ha ido constituyendo, desde el siglo XIX, un conjunto de instituciones y de hábitos que hablan a las claras de autonomía. Resulta insólito, por ejemplo, que en Guayaquil la vida de los pobres dependa desde el nacimiento hasta la muerte de una institución privada de beneficencia, convertida en un poder paralelo y que goza de rentas recolectadas en todo el país con su monopolio en la lotería. A la sombra de la Junta de Beneficencia nacen miles de guayaquileños pobres, en su seno se curan todos los males a lo largo de su vida, y sus deudos los acabarán sepultando en el panteón de la Junta de Beneficencia.

Expresiones como aquellas de “pelucones de Samborondón” o las polémicas con la Junta Cívica (otra institución con aires autonómicos y pelucones), o con el alcalde Jaime Nebot, que a momentos semejan disputas infantiles, no son más que escaramuzas de una disputa por el poder político en Guayaquil y su región de influencia.

¿Puede el estilo de estas confrontaciones justificar el calificativo de “autoritario” para identificar al gobierno? Por lo menos, podemos ponerlo con signos de interrogación, en el marco de una sociedad signada por el autoritarismo en todos los campos y con el ejercicio de la “autoridad autoritaria” desde las ventanillas de una oficina pública hasta el comportamiento de la policía, pasando por la vigencia del machismo y la arbitrariedad y arrogancia hasta en el modo de conducir un vehículo.

Un estilo presidencial sobre el cual parece que seguiremos polemizando y en el que encontraremos más de una razón y más de una contradicción; como el hecho inexplicable de exigir a los medios ética en la manipulación del cuerpo femenino y colocar como una de sus assembleístas a una modelo protagonista de ese tipo de manipulaciones.

Lo evidente es que a nombre del supuesto autoritarismo del régimen, vivimos una pompa de jabón, una sobre excitación de ciertos sectores mediáticos, políticos y económicos que siguen enfangados en el miedo, en el sobredimensionamiento de ciertos hechos, en la búsqueda de símiles apocalípticos (el chavismo, la manipulación presidencial de la Asamblea Constituyente, el abandono de la dolarización, el castigo gringo, el riesgo país, la fuga de los capitales, el fin de la libertad de expresión, etc., etc.).

Y adicionalmente, algo que ya señalamos en un análisis anterior: la pérdida de toda orientación y brújula por parte de una oposición de derecha que no encuentra la forma de reconstituirse. Los tres partidos representativos de ese sector: el Social Cristiano, la Unión Demócrata Cristiana y el PRIAN dan golpes de ciego y ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en una “contra-consulta” propuesta por Jaime Nebot en Guayas para salvar su control del caudal electoral y vivirán, en las elecciones para la Asamblea, un aparatoso fracaso, con excepción de ciertos reductos de votos que pueda conservar el PRIAN. Este momento, toda la oposición política se reduce a una figura solitaria y agria: Gloria Gallardo.

En otros campos se pueden señalar algunos elementos de evaluación de estos seis meses:

- Un hecho relevante es la prioridad que el gobierno comienza a dar al gasto y a la gestión de las políticas sociales. Allí existe, de la mano de la ministra Jeanette Sánchez (Bienestar Social) y en cierta medida del ministro Raúl Vallejo (Educación), un giro importante. Incluso ciertas políticas de tinte asistencialista, como el bono de desarrollo, está siendo reinterpretado como un escenario de iniciativas (pequeños créditos, corresponsabilidad de las madres) que van más allá del asistencialismo. En educación, igualmente, se

buscan reformas al sistema e implantación de una real universalización de la educación básica.

- En el campo hidroeléctrico y de reconducción de áreas como las telecomunicaciones y el procesamiento de derivados del petróleo, el gobierno inició un plan agresivo trascendente, impulsado por Alberto Acosta y sostenido por los actuales directivos del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.
- En el campo internacional, a pesar de ciertas “meteduras de pata” y equívocos en la conducción desde la cancillería de las relaciones con Colombia, hay dos elementos muy importantes: el volver la mirada al sur a través de la consolidación de la presencia en el MERCOSUR y la participación decidida en la creación del Banco del Sur, desvirtuando al mismo tiempo los agoreros anuncios de una dependencia con respecto al chavismo; y la utilización, en las relaciones con Estados Unidos, del interés norteamericano de mediar en la conformación del eje Venezuela-Bolivia-Ecuador-Argentina. El gobierno se ha preocupado por fortalecer sus relaciones con Perú y Chile y de diferenciar el manejo de sus relaciones con Estados Unidos, de su posición frente al FMI y al Banco Mundial. Un relativo éxito de imagen puede ser la ampliación del ATPDEA, pero es evidente que el país no puede seguir confiando en esas medidas perentorias en cuanto a su comercio con su principal socio: Estados Unidos.
- Existen dos campos en los que las políticas del gobierno son contradictorias: una, las políticas medio ambientalistas que tienen este momento un elemento de extraordinario valor: la suplantación de explotación petrolera por conservación, en el caso del ITT, acompañadas de políticas sobre las poblaciones voluntariamente aisladas; esta propuesta gana adherentes de forma creciente en gobierno y organizaciones internacionales, incluidas petroleras que buscan robustecer la otra cara de la medalla de la explotación. Es evidente que esta tesis fue forzada dentro del gobierno por el ex ministro Alberto Acosta, pero ya es una tesis del régimen que puede modificar profundamente la visión del Ecuador con respecto a su futuro petrolero. La conservación del Yasuní es ya el rostro emblemático de la imagen de cambio que proyecta el gobierno. Sin embargo, la otra cara de la medalla es un deficiente en extremo ejercicio de la ministra de Medio Ambiente, cuya destitución viene siendo reclamada con insistencia; la crisis de Galápagos ha sido incapaz de manejarla, se ha ocultado a través de una poco practicable moratoria maderera la incapacidad de establecer un buen control forestal, ha sido desmentida hasta en el caso de la entregas de tierras a la comunidad awa. Igualmente no se han revisado ciertas políticas referidas a un recurso que es estratégico y en torno al cual existe un proceso de organización social muy importante: el riego y la existencia de una entidad rectora de los recursos hídricos que necesita cambios: la Central Nacional de Recursos Hídricos, que en tiempo de euforia privatizadora en el gobierno de Sixto Durán Ballén reemplazó, conjuntamente con algunos organismos regionales autónomos, al INERHI (Instituto Ecuatoriano de Recursos Hídricos).

- El otro campo en el que se producen contrasentidos, es el militar. Se comenzó por romper un compromiso hecho en el momento del retorno democrático y que mantuvo al ministerio de Defensa secuestrado por los militares; para pasar a entregar al sector militar la ejecución de programas vitales como la vialidad y la construcción de la planta de gas en tierra, con lo que se fortalece la intervención, ajena a la Constitución, de las Fuerzas Armadas en actividades que no tienen que ver con su papel principal. Por último se pide el derecho al voto de los militares sin tener en cuenta que aquello pasa por una modificación profunda de las Fuerzas Armadas, del manejo de las tres fuerzas de manera casi autónoma y de los intereses económicos que mantienen.
- Hace falta que el gobierno concrete una estrategia para enfrentar a la corrupción. No basta la honestidad presidencial y de una buena parte de su círculo. Ese es un aspecto muy sensible en el discurso oficial y si no se concreta se puede revertir en su contra.
- Hay dos campos en los que el régimen, o no da pie con bola, o simplemente están ausentes: cultura, reforma de la policía y comunicación/información. En el primero y segundo, no hay signos vitales. En el tercero, fracasó la gestión de la Secretaría de Comunicación hoy vacante, con un proyecto de TV y prensa estatal que no se sabe en qué sentido camina, y en momentos en que el tema de la libertad de expresión y la relación con los medios vive interrogantes que tienen que resolverse en un marco democrático de manera urgente. Y la aplicación de la Ley de Transparencia de la Información no ha avanzado de manera significativa, a pesar de que el gobierno afirme lo contrario en su evaluación de los seis meses.

Está finalmente, el aspecto central del proceso: la Asamblea Constituyente que se elegirá el 30 de septiembre y se reunirá a fines de octubre de 2007. Se han puesto sobre la mesa aspectos vitales en campos como la reorganización territorial y la posibilidad de una real y solidaria descentralización; la consolidación y profundización de derechos particularmente en cuanto establecer dentro de la Constitución condiciones taxativas para su ejecución; la relación ejecutivo-legislativo y el replanteamiento del sistema político presidencialista; la independencia y liquidación de la influencia partidista en los órganos de control, en los tribunales electoral y constitucional y en el ejercicio unitario de la función jurisdiccional; la reforma militar; la implantación de un sistema de planificación nacional y participativo que acabe con deformaciones como la existencia de gobierno paralelos protagonizados por los organismos de desarrollo regional (ECORAE, CRM, CREA, entre otros); replanteamiento de los sistemas de representación y de partidos políticos; el ejercicio efectivo del control ciudadano sobre los organismos del Estado y de revocatoria del mandato a todos los niveles de elección popular; el rol social de los medios de comunicación y el ejercicio reglamentado de la libertad de expresión.

Por más allá de las reformas, lo fundamental en la Asamblea Constituyente será el relevo político que ésta marque, el fortalecimiento de nuevas estructuras políticas y la creación de condiciones políticas para ejecutar los mandatos constitucionales en el futuro.

Un síntoma que vale la pena tener en cuenta, en respuesta a los miedos al totalitarismo, es la conformación de la lista de Alianza País presidida por Alberto Acosta, figura fundamental del proyecto político en torno a Rafael Correa, en el que existen voces valiosas e independientes y el hecho de que en la Asamblea va a expresarse una diversidad de manifestaciones de una tendencia progresista y honesta que deberá concretar alianzas, con autonomía incluso de los criterios del gobierno de Rafael Correa. Cada vez más se aleja el fantasma de una Asamblea manipulada por Correa; y muy bien puede ocurrir que una corriente a su interior construya una alternativa política estructurada por sobre figuraciones personales. De todos modos, esos son, por el momento, los buenos deseos.

Si se intentara una síntesis que recupera los aspectos de trascendencia de estos seis meses, se reduciría a reconocer la apertura de campos de debate, de replanteamiento y de cambios, provocados por el gobierno y en particular por el estilo presidencial y de ciertos ministros como Alberto Acosta o Jeannette Sánchez. El gobierno ha repuesto el papel de la planificación que fue desmantelada por los afanes privatizadores del gobierno de Sixto Durán e ignorados en los gobiernos posteriores. Hacia el futuro, queda la necesidad de avanzar en forma concreta en las reformas y en la necesidad del régimen de consolidar una estructura política que más allá de la figura presidencial, le de sustento al proceso. Y los signos de aquello, tal vez podrán medirse tanto en la gestión del gabinete, que ha sido en cierta forma irregular y las perspectivas que marque la Asamblea Constituyente.